

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diecinueve (19) de julio de dos mil veintidós (2022)

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la ley 2213 de 2022, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por GLORIA AMPARO AGUDELO HURTADO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- y la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A. (Radicado 05001-31-05-014-2019-00666-01).

ANTECEDENTES

En lo esencial pretende la demandante se declare la ineficacia de la vinculación que realizó a la AFP Protección S.A, para que se ordene su vinculación sin solución de continuidad al RPM administrado por Colpensiones, que se condene a la primera a devolver los dineros de la actora de la cuenta de ahorro individual más los rendimientos a la segunda, y a ésta aceptarlos. Pide igualmente que se condene en costas a las demandadas.

Como sustento básico de sus pretensiones manifiesta sucintamente lo siguiente: nació el 11 de julio de 1962; se vinculó por primera vez al sistema general de pensiones en concreto al RAIS, desde el mes de julio de 1998, entidad a la que permanece afiliada en la actualidad. Al momento de originarse dicha afiliación, recibió información deficiente, la cual no le permitió conocer las condiciones del régimen al que se había afiliado, ni tenía conocimiento de

las circunstancias que dicha decisión comportarían, generando así un desmedro injustificado en su derecho pensional.

Colpensiones como entidad demandada, dio respuesta de forma oportuna a la demanda. Se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones señalando que es a la parte actora a quien corresponde probar lo que afirma en su demanda, además aceptó los hechos que corresponden a la edad de la demandante, vinculación inicial al RAIS por medio de la AFP Protección S.A y los hechos relativos a la respuesta negativa de Protección S.A en cuanto a la solicitud de su traslado al RPMPD. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: imposibilidad de traslado de régimen, inexistencia de la obligación de reconocer la afiliación al RPM por falta de legitimación en la causa por pasiva, improcedencia de la declaratoria de ineficacia o invalidez del traslado, prescripción, entre otras.

Protección S.A., también allegó contestación de demanda de forma oportuna, para lo cual esgrimió una serie de argumentos fáctico-jurídicos, con la finalidad de oponerse íntegramente a las pretensiones deprecadas por la actora. De los hechos aceptó lo atinente a la vinculación inicial de la demandante a esta entidad, y la negativa de Protección S.A a dar viabilidad para su vinculación al RPMPD. Como excepciones de mérito propuso, entre otras: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema general de pensiones.

El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 1° de diciembre de 2021, dispuso lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR la ineficacia de la afiliación de la señora GLORIA AMPARO AGUDELO HURTADO, identificada con C.C. 43.039.907 al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por COLMENA AFP hoy PROTECCIÓN S.A. En consecuencia, DECLARAR que la demandante tenía la opción de escoger régimen de prima medida con prestación definida como administrador de su futuro pensional, en aquel entonces el Instituto

de Seguros Sociales hoy COLPENSIONES, y respecto del mismo no recibió ninguna ilustración por parte de la AFP COLMENA hoy PROTECCION S.A.

SEGUNDO: CONDENAR a PROTECCIÓN S.A. a trasladar con destino a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de ésta providencia, el valor de la cuenta de ahorro individual de la señora GLORIA AMPARO AGUDELO HURTADO incluyendo los rendimientos financieros y las comisiones de administración, que incluyen el seguro previsional y la garantía de la pensión mínima, debidamente indexados desde el 15 de julio de 1998, fecha de efectividad del traslado.

TERCERO: ORDENAR a COLPENSIONES, que asuma la afiliación de la señora GLORIA AMPARO AGUDELO HURTADO al régimen de prima medida con prestación definida, a partir del 15 de julio de 1998, sin solución de continuidad.

CUARTO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por las demandadas.

SEXTO: COSTAS del proceso a cargo de PROTECCION S.A. a favor de la parte demandante, respecto de las cuales se fija la suma un salario mínimo legal mensual vigente, por concepto de agencias en derecho. Se ABSUELVE a COLPENSIONES de la condena en COSTAS.

Inconforme con la decisión, presentaron recurso de apelación las apoderadas de Protección S.A. y Colpensiones.

La de la primera, es decir, Protección S.A., en la sustentación de su recurso, manifestó que los descuentos que se realizan en materia de administración en los fondos de pensiones, en particular los valores de comisión de administración y primas de seguro previsional, se encuentran plenamente autorizados por la ley en uno y otro régimen. En este sentido indicó que como se evidencia en la cuenta de ahorro individual de la demandante, se produjeron los correspondientes frutos derivados de dicha administración, de modo que ordenar la restitución de las mencionadas sumas a Colpensiones, configuraría un enriquecimiento sin causa, ya que dicha entidad, estaría recibiendo los frutos de una administración en la cual no tuvo injerencia, y además que estos valores no van a constituir financiamiento de la pensión de vejez de la afiliada.

También señaló que estos emolumentos no pueden ser descontados, porque ya fueron ejecutados, en particular lo que respecta al valor de la prima previsional, que ya fue girada a la aseguradora en los términos legales correspondientes, y que además, esta entidad es un tercero de buena fe, que no tuvo ningún tipo de relación en la afectación que alega la demandante.

Por último, señaló que estos conceptos ya se vieron afectados por el fenómeno de la prescripción, previsto en el artículo 488 del CST.

Por su parte la apoderada de Colpensiones, en la sustentación de recurso, se limitó a señalar que no obró dentro del plenario, prueba de la cual se pudiera inferir que la actuación de la AFP Protección S.A, estuvo prevista de algún elemento que pudiese haber viciado el consentimiento de la afiliada, y que por lo tanto, dicha afiliación es válida a la luz de su alegato. Por otro lado, solicitó que fueran restituidos todos los valores que reposen en la cuenta de ahorro individual de la demandante con sus respectivos frutos, y todos los porcentajes que se hayan descontado como parte de gastos de administración, o que tuvieran su origen en los aportes realizados por la afiliada.

CONSIDERACIONES

La Sala restringirá su estudio a los puntos objeto de inconformidad planteados por los apoderados de Protección S.A y Colpensiones, conforme a las directrices que para el efecto traza el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001. Aquellas condenas u órdenes impuestas a esta última administradora que no hayan sido apeladas serán estudiadas por la vía de la consulta (art. 69 del C.P. del T. y de la S.S.), de conformidad con el criterio expresado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias del 26 de noviembre y 4 de diciembre de 2013, rads. 34552 y 51237, y más recientemente por la sentencia de tutela SLT7382-2015 (Rad. 40200).

Fuera de toda discusión, por obrar prueba suficiente en el plenario, se encuentra que la demandante nació el 11 de julio de 1962 (archivo 04 página 18), que suscribió formulario de afiliación al sistema general de pensiones al

RAIS por medio de la entidad Colmena S.A., hoy Protección S.A., el día 14 de julio de 1998 (archivo 04 página 32), sin embargo, no se registraron afiliaciones ni al ISS hoy Colpensiones, ni a otras entidades del RAIS.

Partiendo entonces de lo que debe estudiarse por los recursos de apelación, del contexto de los hechos y pretensiones de la demanda, y por supuesto de lo decidido, lo primero a esclarecer es si la afiliación de la demandante fue o no ajustado a la ley, y en caso de que no lo hubiere sido, analizar si hay lugar o no a la devolución de aportes, rendimientos y demás ítems. Esto implica establecer, entre otros asuntos, si la voluntad de la señora Agudelo Hurtado al momento de afiliarse al RAIS estuvo afectada por un vicio en el consentimiento o conducta antijurídica semejante.

Para estos fines, **y dado el poder vinculante de la jurisprudencia de las altas Cortes**, entre otras razones porque una de sus funciones esenciales es la de velar por la unidad e integridad del ordenamiento jurídico (art. 86 del CPTSS y 333 del CGP), criterio que ha destacado la Corte Constitucional en muchas de sus decisiones (véase entre otras la C 539 de 2011 y la SU 354 de 2017), la Sala estima del caso hacer referencia textual a algunos apartes de la sentencia dictada por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia el 8 de mayo de 2019 (SL1688-2019, Rad. 68838, ratificada, entre otras, en las sentencias SL1741-2021, SL1743-2021 y SL1942-2021), la cual compendia para el día de hoy, con total claridad y precisión, además de encontrarse una adecuada sustentación, el estado de la materia en asuntos de ineficacia de traslados de régimen pensional por falta de una debida información, las consecuencias de la declaración dada por los afiliados en los documentos de traslado de régimen, la carga de la prueba, y los alcances de la ineficacia y las re-asesorías que se realizan con posterioridad al traslado inicial, entre otros, **y que le dan respuesta razonable, de manera directa o indirecta a los distintos puntos que habrán de estudiarse en esta providencia, en especial al de determinar si las distintas decisiones del fallador de primer grado pueden o no avalarse.** Sobre el deber de información, en ésta quedó dicho:

El anterior recuento sobre la evolución normativa del deber de información a cargo de las administradoras de pensiones podría, a grandes rasgos, sintetizarse así:

Etapa acumulativa	Normas que obligan a las administradoras de pensiones información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales Y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.º, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarlo
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	1748 de 2014 Artículo 3. del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n. 016 de 2016	Junto Con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

1.4 Conclusión: La constatación del deber de información es ineludible

Según se pudo advertir del anterior recuento, las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. Desde luego que con el transcurrir del tiempo, el grado de intensidad de esta exigencia cambió para acumular más obligaciones, pasando de un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble asesoría. Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad, por parte de los jueces, de evaluar el cumplimiento del deber de información de

acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido.

Así las cosas, el Tribunal cometió un primer error al concluir que la responsabilidad por el incumplimiento o entrega de información deficitaria surgió con el Decreto 019 de 2012, en la medida que este exista desde la expedición de la Ley 100 de 1993, el Decreto 663 de 1993 y era predicable de la esencia de las actividades desarrolladas por las administradoras de fondos de pensiones, según se explicó ampliamente.

Adicionalmente, la Sala no puede pasar por alto la indebida fundamentación con la que la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal de Medellín emitió su sentencia, pues sin razón alguna se limitó a señalar que a partir del Decreto 019 de 2012 es imputable responsabilidad por omisión o cumplimiento deficitario del deber de información a las AFP, sin especificar la norma de ese decreto que le daba sustento a su dicho y sin la construcción de un argumento jurídico que soportara su tesis. Es decir, la sentencia estuvo desprovista de una adecuada investigación normativa y un discurso jurídico debidamente fundamentado.

En cuanto a las consecuencias de las constancias que se registran en los formularios de afiliación o traslado, se dijo:

“2. El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente. Necesidad de un consentimiento informado

Para el Tribunal el consentimiento informado no es predicable del acto jurídico de traslado, pues basta la consignación en el formulario de que la afiliación se hizo de manera libre y voluntaria.

La Sala considera desacertada esta tesis, en la medida que la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre U voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado.

Sobre el particular, en la sentencia CSJ Sl. 19447-2017 la Sala explicó:

Por demás las implicaciones de la asimetría en la información, determinante para advertir sobre la validez o no de la escogencia del régimen pensional, no solo estaba contemplada con la severidad del artículo 13 atrás indicado, sino además el Estatuto Financiero de la época, para controlarla, imponía, en los artículos

97 y siguientes que las administradoras, entre ellas las de pensiones, debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios de buena fe «y de servicio a los intereses sociales» en las que se sancionaba que no se diera información relevante, e incluso se indicaba que «Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario[...].

De esta manera, el acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una ilustración al trabajador o usuario, como mínimo, acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias del traslado.

Por tanto, hoy en el campo de la seguridad social, existe un verdadero e insoslayable deber de obtener un consentimiento informado (CSJ Sl. 19447-2017), entendido como un procedimiento que garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.

Como consecuencia de lo expuesto, el Tribunal cometió un segundo error jurídico al sostener que el acto jurídico de traslado es válido con la simple anotación o aseveración de que se hizo de manera libre y voluntaria y, por esa vía, descartar la necesidad de un consentimiento informado.

En materia de carga de la prueba del deber de información, anotó:

“En consecuencia, si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo,

se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo.

Como se ha expuesto, el deber de información al momento del traslado entre regímenes, es una obligación que corresponde a las administradoras de fondos de pensiones, y su ejercicio debe ser de tal diligencia, que permita comprender la lógica, beneficios y desventajas del cambio de régimen, así como prever los riesgos y efectos negativos de esa decisión.

Y por último, en cuanto al alcance de la ausencia del deber de información y de los nulos efectos que pueden generar las reasesorías posteriores, quedó dicho:

“Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo. Esto, desde luego, teniendo en cuenta las particularidades de cada asunto.

...

Ahora, si bien la AFP brindó a la actora una reasesoría el 26 de noviembre de 2003, en virtud de la cual se concluyó la inconveniencia de continuar en Protección S.A., la Sala considera que este servicio no tiene la aptitud de subsanar el incumplimiento de la obligación de información en que incurrió la AFP al momento del traslado, por dos razones:

En primer término, porque el traslado al RAIS implicó la pérdida de los beneficios derivados de la transición al no contar la demandante con 15 años de cotización o servicios a 1.º de abril de 1994. Es decir, así se hubiese trasladado la demandante al día siguiente de la reasesoría, de todas formas ya había perdido la transición.

En segundo lugar, porque la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como se dijo, el afiliado requiere para tomar decisiones de la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información, que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, un dato solo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al

destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga oportunamente y, por tanto, pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de información.

Por otro lado, no es de recibo el planteo de Protección S.A., cuando sostiene que una vez realizó la reasesoría, Myriam Arroyave Henao no mostró interés en la ineficacia de la vinculación al RAIS, al conservar su status de afiliada durante un tiempo, Se dice lo anterior ya que la sugerencia de Protección S.A. de regresar al RPMPD, se produjo el 26 de noviembre de 2003, y el formulario para la nueva afiliación al ISS se diligenció el 14 de enero de 2004 (f. 0 97), es decir, la interesada no dejó transcurrir dos meses desde que recibió asesoría. Por lo demás, este lapso es razonable, pues dada la relevancia de esta determinación, era natural que la accionante se tomara un tiempo de reflexión, buscara información y consejo profesional para, finalmente, adoptar su elección.

Con sustento en estos presupuestos, esta Colegiatura comparte la decisión proferida por la *a quo* en este aspecto de la ineficacia, de ahí que habrá de confirmarse el punto, pues basta la mera ausencia de información al afiliado, clara, precisa y completa, para que se produzca la irregularidad del acto de cambio de régimen pensional; ahora bien, en el caso concreto, si bien no se configuró un traslado de régimen pensional, sino que se efectuó una vinculación inicial al RAIS, no puede desconocerse la aplicación del artículo 271 de la ley 100 de 1993, por medio de la cual se señala que cuando una entidad jurídica que atente de cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación al sistema de seguridad social, se declarará la misma sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. De acuerdo al material probatorio que fue allegado al plenario, no se logró determinar que la entidad accionada responsable de la vinculación, haya demostrado que cumplió a cabalidad con la obligación que fue señalada ampliamente por esta colegiatura, en la afiliación de la ahora demandante, la cual fue realizada el día 14 de julio de 1998. Luego de haber analizado los documentos aportados, no se observa más que una formalidad legal, de la cual se desprenden formulaciones genéricas que no satisfacen lo que ya fue dirimido por la jurisprudencia, de igual forma, del interrogatorio de parte que le fue practicado a la demandante, no se logró obtener confesión que indicara el cumplimiento de estos requerimientos.

Dada la ineficacia que de la vinculación inicial ahora se concreta, deben ser aplicados los efectos del artículo 1746 del CCC, por medio del cual se estipulan los efectos de restituciones mutuas, que deben ser aplicados de acuerdo con los preceptos que se encuentran contenidos en el artículo 271, tal y como ya fue señalado previamente, por lo cual Protección S.A. debe devolver a la administradora del RPMPD (Colpensiones) todas las cotizaciones, incluyendo sus rendimientos, las sumas de dinero que retiene o haya retenido o deducido para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, gastos de administración, seguros previsionales y otros descuentos, pues solo de esta manera se entiende que el restablecimiento es completo. Con esto dicho quedan resueltos los reparos que plantean los apoderados recurrentes, lo que hace que deba adicionarse la sentencia. En cuanto a los gastos de administración, sea del caso recordar lo que sostiene la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema en la sentencia SL1421-2019, Rad. 56174 en la cual se dice lo siguiente:

“Conforme a lo establecido en sede de casación, fuerza concluir entonces, que debe declararse la ineficacia de la afiliación de la demandante al sistema pensional de ahorro individual, debiendo retrotraerse las cosas al estado en que se encontraban, es decir, como si ello no hubiera ocurrido, lo cual trae como consecuencia, que la actora jamás perdió el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100/93, y de igual forma, que el Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. deba devolver los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, como en oportunidades anteriores lo ha dispuesto la Sala, pudiéndose traer a colación las sentencias CSJ SL17595-2017 y CSJSL4989-2018, donde se recordó la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989 ...”.

Y de manera más precisa, en cuanto a todos los conceptos antes anotados, esta misma Corporación en sentencia del pasado 29 de julio (SL 2877 2020, Rad. 78667), expresó:

En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos

privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.

Ahora, los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cubre a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión. Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal.

En igual sentido puede verse la SL4803-2021 (Rad. 88879) del 20 de octubre de este año 2021, en la cual de manera expresa y directa se refirió a la cuenta de ahorro individual, los rendimientos, cuotas de administración, comisiones y descuentos para los seguros de invalidez y sobrevivencia.

Por último, en lo que respecta a la argumentación esgrimida en el recurso de alzada, en particular, de la buena fe de los terceros que hicieron parte indirecta del negocio que allí se formuló, en especial de las entidades aseguradoras, debe decirse que; las sumas que constituyeron aportes con destino al pago de seguros previsionales que ya hayan sido trasladados o pagados a dichas entidades, deberán ser restituidos con cargo a sus propias utilidades o patrimonio, tal como fue dirimido por la jurisprudencia anteriormente (Ver Sentencias SL1834 de 2022 Radicado 88421, SL2207-2021 Radicado 84578, SL2209-2021); sumas que deben trasladarse debidamente indexadas, tal como lo dispuso el Juez de Primera Instancia y lo tiene señalado el Órgano de Cierre de la especialidad laboral en Sentencias como SL1022-2022, SL1017-2022, SL1125-2022.

Las excepciones propuestas frente a los ítems anteriores, estuvo bien que no se declararan probadas: unas por no envolver hechos extintivos o

modificativos de los derechos reconocidos, entre ellas las de que no existió ningún vicio en el consentimiento al firmar su afiliación, falta de causa para demandar y buena fe; y otras, como la de prescripción, por estar comprometido un derecho pensional, que como bien se sabe no puede verse afectado por este medio extintivo. En la sentencia inicialmente citada, se anotó:

Conforme lo explicado, los afiliados al sistema general de pensiones pueden solicitar, en cualquier tiempo, que se declare la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales y, por esa vía, que se reconozca a cuál de los dos regímenes pensionales (RPMPD o RAIS) se encuentran afiliados. Lo expuesto no es algo nuevo en la jurisprudencia del trabajo, pues incluso desde la sentencia CSJ SL795-2013 ya la Corte había adocinado que «el asegurado está legitimado para interponer, en cualquier tiempo, reclamos relacionados con la afiliación, las cotizaciones, el ingreso base de cotización y todos aquellos componentes de la pensión».

Hay que mencionar que así como la declaración de ineficacia es imprescriptible, los derechos que nacen de ello también tienen igual connotación. En efecto, conforme al artículo 48 de la Constitución Política, el derecho a la seguridad social es un derecho subjetivo de orden irrenunciable, premisa que implica al menos dos cosas: (i) no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por su titular (inalienable e indisponible), como tampoco puede ser abolido por el paso del tiempo (imprescriptible) o por imposición de las autoridades sin título legal (irrevocable). En este sentido, la jurisprudencia del trabajo ha sostenido que el derecho a la pensión o a obtener su valor real, puede ser justiciado en todo tiempo (CSJ SL8544-2016).

Dadas las consideraciones anteriormente explicadas, se habrá de confirmar el fallo de primera instancia, haciendo una precisión en los que respecta a los términos en los cuales las entidades accionadas deben cumplir la restitución de los guarismos que ya fueron señalados previamente; para tal efecto, debe aplicarse el artículo 2.2.2.4.8 del decreto 1833 de 2016 de forma íntegra, al momento de producirse lo que a continuación se ordena.

No existiendo otros puntos por resolver, las costas de primera instancia seguirán estando a cargo de Protección S.A. En esta instancia, dada la improsperidad de los recursos de apelación, las costas estarán a cargo de las recurrentes. Como agencias en derecho se fija la suma de 1 SMLMV a cargo de cada una de éstas.


FALLA

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia objeto de apelación y se sirve de precisar que para el cumplimiento de la misma, deberá darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 2.2.2.4.8 del decreto 1833 de 2016.

Costas de la instancia a cargo de Protección S.A y Colpensiones. Como agencias en derecho se fija la suma de 1SMLMV a cargo de cada una y a favor de la demandante.

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 05001310501420190066601
Proceso: Ordinario
Demandante: GLORIA AMPARO AGUDELO HURTADO
Demandado: COLPENSIONES Y PROTECCION S.A
M. P. CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo: 19/07/2022
Decisión: CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 21/07/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario